

# Imprevisión, crisis y planes

Las buenas expectativas generales y la recuperación de la actividad económica se han visto afectadas por sucesivas "crisis".

La crisis de inseguridad y energía sorprendieron al gobierno devaluando su principal capital: la confianza de la población.

El modo en que se gestó y enfrentó la crisis energética generó preocupación por sus consecuencias directas y por la dirección de la política adoptada.

En los últimos meses, diversos acontecimientos comienzan a afectar negativamente la marcha ascendente de la economía argentina, generando dudas sobre la continuidad del proceso de reactivación en el mediano plazo.

El más destacado es el problema de la insuficiencia en el abastecimiento de energía. Las autoridades no pueden alegar imprevisibilidad, por cuanto desde hace meses, la mayoría de los análisis anticipaban estas dificultades si se mantenía la fuerte tendencia ascendente de la demanda y no se concretaban nuevas inversiones por parte de las empresas involucradas en la prestación del servicio, en el marco de la discusión del reajuste de tarifas. Otro acontecimiento trascendente ha sido el masivo reclamo popular por mayor seguridad y su impacto negativo sobre la imagen del gobierno.

Ambos acontecimientos no fueron previstos y consecuentemente derivaron en crisis debido a la necesidad de implementar medidas de último momento y con muy elevados costos. La respuesta del Gobierno frente a ambos problemas, consistió en intentar retomar la iniciativa procurando desdibujar la imagen de inacción; y se tradujo en el lanzamiento de sendos planes, el plan de Seguridad y el plan de Energía.

Desde el punto de vista del análisis de la situación económica, la importancia de estos sucesos reside en el desgaste generado sobre la imagen presidencial y que comienzan a reflejarse claramente en una disminución de los niveles de confianza de la población en la actual gestión de gobierno. En otras palabras, las crisis han comenzado a devaluar el principal activo actual del gobierno. El cambio de expectativas podría influir negativamente sobre la propensión a gastar de la población y los planes de inversión por parte de las empresas. Por otra parte, el problema tiende a realimentarse por la creciente inestabilidad política, la que se traduce en un mayor grado de incertidumbre.

El modo en que se gestó y enfrentó la crisis energética ha generado preocupación no solo por sus consecuencias directas sino por representar un precedente importante sobre la dirección de la política económica de un Gobierno al que aguardan nuevos y serios desafíos en el corto plazo.

La respuesta oficial a la crisis energética combina una serie de medidas basadas en la incorporación de nuevas regulaciones al precio de la energía, racionamiento de la oferta interrumpiendo el suministro de energía a Chile, recomposición de existencias a través de costosas importaciones de combustible, la creación de un nuevo ente estatal con la finalidad de desarrollar obras de infraestructura financiada con retenciones a la exportación de hidrocarburos y la interrupción del suministro energético contratado por el gobierno de Chile.

Además del costo fiscal, se advierte un elevado costo en términos de credibilidad. Los empresarios dudan sobre nuevos proyectos de inversión por la elevada incertidumbre en torno al marco regulatorio sus negocios. Los gobiernos extranjeros, particularmente Chile, replantean sus relaciones con el país por la imprevisibilidad en el manejo de la política exterior. El incumplimiento de acuerdos contractuales hacen resurgir nuevas dudas y temores de empresarios por riesgo de inseguridad jurídica. Los acreedores del Estado, observan con preocupación como se reduce el "extraordinario" superávit primario en las cuentas fiscales proyectado para el año, debido a la necesidad de financiar los nuevos "planes de acción oficial" así como el mayor temor sobre la solvencia futura del Estado si se reinstala el concepto de crear empresas estatales.

Ambas crisis reconocen un mismo origen, un Estado en bancarota, sin recursos para atender sus funciones esenciales y que a partir de enero de 2001 se declaró oficialmente en cesación de pagos. Consecuentemente, son efectos diferidos de la cesación de pagos. Los sectores sobre los que recaen los costos de las medidas para remediar las crisis actuales en última instancia se suman a la lista integrada por aquellos sobre quienes recae el pago del default.

Si bien es notable la recuperación de la economía, en el marco de un contexto internacional sumamente propicio para los intereses del país, estos acontecimientos debieran ser un serio llamado de atención para recordar que aún quedan cuentas pendientes, escasean los recursos y la única salida es recomponer el ahorro, honrar los compromisos asumidos para recuperar crédito y transformar la estructura del Estado eliminando las actuales ineficiencias.

La principal responsabilidad le corresponde al Gobierno. Ignorar la necesidad de generar ahorro es una elección y tiene sus costos, más allá de la infantil y persistente ficción argentina que es posible postergar indefinidamente las deudas. En todo caso, si esto sucede es porque se cuenta con la capacidad de generar confianza aún cuando crezca el nivel de endeudamiento. En los últimos meses, la Argentina parece haberse apartado de esa senda. Las últimas medidas apuntan precisamente en dirección contraria.

La actual recuperación en un contexto internacional excepcionalmente positivo, esta dando un tiempo valioso para construir las bases una nueva economía con políticas de Estado orientadas por objetivos claros. Es una gran oportunidad, pero lamentablemente no se presentará de modo indefinido. En el último tiempo han surgido claras señales de cambios en el escenario internacional en dirección negativa y esto puede cambiar sustancialmente las perspectivas de la economía argentina para el próximo año.

En los últimos días, la presentación de una nueva propuesta con una importante mejora de las condiciones de pago en relación a la propuesta originalmente presentada a acreedores, constituye una señal importante y positiva hacia la comunidad internacional y hacia los propios argentinos de que todavía se mantiene la meta de intentar reinsertar al país en la economía mundial. La renegociación de la deuda externa es una gran oportunidad de comenzar a cambiar la historia. ■